

La Crisis Andina. El trasfondo político de sus causas, resolución y vigencia

The Andean Crisis. The Political Background of its Causes, Outcome and Present

GERMÁN SARMIENTO

Master of International Affairs, Columbia University

RESUMEN

Con el propósito de obtener una mejor comprensión de las razones, el significado y las implicaciones de la reciente crisis andina, protagonizada por Colombia, Ecuador y Venezuela, el análisis busca encontrar respuesta a esas preguntas a través de una mirada a las coyunturas políticas específicas de estos tres países en el marco del contexto latinoamericano actual.

Palabras clave: FARC, soberanía, ordenadores, crisis, narcotráfico.

ABSTRACT

With the purpose of obtaining a more comprehensive understanding of the reasons, the meaning and the implications behind the recent Andean Crisis, the following analysis tries to find answers to these questions by looking inside the specific political junctures of its protagonists, Colombia, Ecuador and Venezuela.

Key words: FARC, sovereignty, computer, crisis, drug trafficking.

CRISIS ANDINA: ¿QUÉ PASÓ?

Entrada la madrugada del 1 de Marzo el ejército colombiano, apoyado por la inteligencia estadounidense, bombardeó un campamento de las FARC que se encontraba ubicado en plena selva amazónica, al interior de territorio ecuatoriano —aproximadamente a 1,800 metros de la frontera entre los dos países—. El operativo militar dio muerte al segundo comandante de esta guerrilla, Luis Edgar Devia Arias, alias Raúl Reyes, y a otras 22 personas, entre guerrilleros, un ecuatoriano (Franklin Aizala) y cuatro estudiantes mexicanos. Acto seguido, militares colombianos incursionaron en el lugar de los hechos, aseguraron la zona y recuperaron los cuerpos de Reyes y Aizala, los cuales traerían consigo a Bogotá. Adicionalmente, las autoridades colombianas encontraron tres ordenadores portátiles, discos duros y memorias USB que, al revisarse por el gobierno colombiano, desvelaron información que apuntaría, de comprobarse su autenticidad, a una alianza de colaboración activa no sólo política sino también económica y financiera, de los gobiernos de Venezuela y Ecuador con las FARC, y viceversa.

El episodio, que en principio involucró de manera directa a los países de Colombia y Ecuador, dio origen a una tensa espiral de reacciones diplomáticas. El gobierno de Ecuador, encabezado por su presidente Rafael Correa, reaccionó con total rechazo, dando una verdadera demostración de indignación, calificando el hecho de inaceptable. Para él, la acción suponía una grave violación de la soberanía y la integridad territorial de su país, y advertía que, por ningún motivo, cedería en su empeño por lograr su condena. Tras lo hechos, el presidente Correa emprendería una gira internacional por varios países de la región, entre ellos Perú, Brasil, Nicaragua y Venezuela, buscando la solidaridad de estos países con su posición.

Por su parte, el presidente Hugo Chávez que, desde hace meses, sostenía una tensa relación con el presidente colombiano, decidió tomar rápidamente un rol protagónico en el asunto, anunciando el rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia y ordenando la movilización de 10 batallones a la frontera y el despliegue de la aviación militar venezolana.

En cuestión de dos días, tres países, entre ellos dos vecinos, rompían relaciones con el gobierno colombiano y países como Brasil, Argentina e incluso Perú —que habría vivido en los años 90 la tragedia del terrorismo de Sendero Luminoso—, respaldaban la posición del presidente Correa. Sin embargo, ante el embate de Chávez y Correa, el Presidente Uribe reaccionaría con la descarga de una explosiva declaración, informando ante los medios de comunicación que se disponía a denunciar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional «por patrocinio y financiación de genocidas.» El anuncio tenía relación con información descubierta en los ordenadores que señalaba la potencial colaboración financiera del mandatario venezolano a las FARC. Colombia no respondería recíprocamente al movimiento de tropas venezolanas.

Así, mientras que Ecuador buscaba que la atención de la región y el mundo se centrara en la acción militar perpetrada por las fuerzas militares colombianas en su territorio, Colombia intentaba, infructuosamente, llamar la atención sobre lo que la mayoría reconocen significaba un asunto de mucho más fondo y gravedad. Nada menos, que la existencia de un campamento permanente en territorio ecuatoriano de las FARC, en donde el segundo comandante de la organiza-

ción (Raúl Reyes) se refugiaba, despreocupado de la posibilidad de cualquier amenaza. A pesar de que la crisis se superó, y sin demeritar la importancia que jugaron la Cumbre de Río y la Organización de Estados Americanos (OEA) como escenarios efectivos para desinflar oportunamente el tempo de la situación, la verdad es que, mientras los gobiernos vecinos de Colombia continúen coqueteando con las FARC, el problema que dio origen a la crisis seguirá vigente.

Es fundamental entender que Latinoamérica, actualmente, es una región polarizada en torno a lo que Estados Unidos representa y, particularmente, en lo que representa el gobierno de George W. Bush. El mundo cambió después del 11 de Septiembre de 2001 —Invasión a Irak, Abu Grahib, unilateralidad, ataques preventivos, etc.— y, no nos equivoquemos, el liderazgo de Estados Unidos frente al mundo también. En el caso de Latinoamérica, aun cuando todos los gobiernos mantienen relaciones diplomáticas con ese país, incluida la misma Venezuela —que le exporta el equivalente al 60 por ciento de su petróleo lo que equivale al 11 por ciento de las importaciones de crudo de Estados Unidos—, el sentimiento antiamericano ha avanzado notoriamente en la región. Por ejemplo, el sentimiento antiyanqui, ha jugado un rol preponderante en la política diaria de países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, y hasta se podría decir que se ha constituido en un pilar central de varias de las plataformas ganadoras de los últimos ciclos electorales. Mientras que Colombia, sumida en el intento de solucionar su problema interno de violencia, ha buscado en Estados Unidos su principal fuente de apoyo, entablando una estrecha relación con la potencia, Venezuela y Ecuador le han sido abiertamente confrontacionales.

El ataque, las reacciones de Colombia, Ecuador, y Venezuela, el contexto en que escala la crisis y la resolución de la misma evidencian una serie de dinámicas y realidades geopolíticas de enorme trascendencia para el futuro de la región. A continuación, revisaré algunos de los temas que jugaron un papel fundamental en el desenvolvimiento de la crisis, entre ellos, el concepto de soberanía, entendido desde una nueva realidad tras los ataques a la Torres Gemelas del 11 de Septiembre de 2001, el problema del crimen transnacional, particularmente el terrorismo y el narcotráfico y, por último, cómo la persecución de objetivos políticos internos dominó la toma de decisiones de los protagonistas, reflejando una preocupante ausencia de principios sólidos

de cooperación entre las partes. En esta línea, el análisis se centrará en las particularidades y especificidades de las coyunturas políticas de Colombia, Ecuador y Venezuela.

Colombia: «Ningún gobierno se va a quedar con los brazos cruzados siendo testigo de cómo sus nacionales son asesinados desde el otro lado de la frontera.» (Fernando Araujo, Canciller colombiano, Marzo 26)

Los países de la región interpretaron como una violación a la soberanía de Ecuador el ataque. Por ello, resulta fundamental entender por qué Colombia lo llevó a cabo, a pesar de las consecuencias diplomáticas que este podría significarle.

El gobierno reconoció que violó la integridad territorial de su vecino, y por ello presentó excusas reiterativamente, pero insistió en que en ningún momento la acción iba dirigida a los ecuatorianos. Por el contrario, el ataque apuntaba directamente al campamento de las FARC.

El gobierno colombiano, liderado por el Presidente Uribe, estaba plenamente dispuesto —lo cual no quiere decir que necesariamente preparado— a pagar el costo diplomático de la acción militar en suelo ecuatoriano. Desde que Álvaro Uribe tomó posesión, el 7 de Agosto de 2002, su compromiso de combatir a las FARC sería una de las prioridades de su plataforma de gobierno, justificado sobre el claro mandato que el pueblo colombiano le daba para hacerlo. En consecuencia, la reelección presidencial (prohibida en la Carta Constitucional de 1991) se aprobaría en 2004, bajo el argumento de darle continuidad y sostenibilidad particularmente a su política de «Seguridad Democrática», cuyo principal objetivo es la recuperación del monopolio del uso legítimo de la fuerza y la «restauración» de la presencia territorial del Estado. No sobra recordar que dicha política ha sido el fundamento de su altísima popularidad cuyos márgenes de aceptación, a lo largo de 6 años, han sido en promedio superiores al 60 por ciento y alcanzaron una cifra record del 84 por ciento durante la actual crisis. Así mismo, tasas de crecimiento económico record que, en 2007, alcanzaban el 6.80 por ciento, han fortalecido su posición.

Colombia defendía su caso bajo el principio de la legítima defensa, en contra de una organización terrorista, cuyo principal objetivo no

es otro que derrotar a un gobierno que ha sido democráticamente elegido. Por esta razón, el bombardeo se realizaba en nombre de su «seguridad nacional» y se justificaba ante la realidad de que son las FARC, las que en primer lugar no respetan fronteras. En este marco, el presidente Uribe, su canciller y su embajador ante la OEA, señalaron, una y otra vez, la obligación que tienen todos los países de darle cumplimiento a la resolución 1373, de 2001, de Naciones Unidas, que insta a los gobiernos a impedir «que quienes financian, planifican, facilitan o cometen actos de terrorismo utilicen sus territorios respectivos para esos fines, en contra de otros Estados o de sus ciudadanos».

Caso distinto es el de las FARC que, no en vano, fueron el motivo de inspiración de la movilización más multitudinaria en la historia del país. El 4 de Febrero, más de 9 millones de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país y se congregaron en plazas de muchas otras ciudades del mundo, como Washington, Madrid, París, Caracas e, incluso, Quito, en protesta por las atroces prácticas con las que comulga este grupo guerrillero. Además de su significativa participación en el negocio del narcotráfico para financiar su actividad militar, las FARC también son responsables del mayor reclutamiento de niños y niñas, entre los actores del conflicto, y los mayores secuestradores del mundo, con más de 700 secuestrados en su poder. Entre ellos, tres estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, también de nacionalidad francesa. Su extenso historial criminal incluye acciones como: la bomba del Club el Nogal, en Bogotá, que provocó la muerte de 36 personas y más de 200 quedaron gravemente heridas; la masacre de Bojayá, en 2002, en donde 119 civiles murieron calcinados por «cilindros bomba» lanzados por las FARC al interior de una iglesia, o la ejecución de 11 diputados de la Asamblea del Valle, en 2007, entre otros. Tanto el repudio de los colombianos hacia las FARC, como el calificativo de terroristas dado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, no son gratuitos.

Sin duda, dar muerte a Raúl Reyes, reconocido como el incuestionable sucesor del envejecido Manuel Marulanda Vélez, alias «Tirofijo» (máximo líder de la organización), era un triunfo monumental para el gobierno. Los mismos analistas del conflicto armado confirman este golpe como el de mayor impacto en los casi 50 años de vida de las FARC. Por ello, es lógico concluir que, incluso ante la inespe-

rada reacción de la comunidad internacional —desde la perspectiva colombiana—, el gobierno colombiano pagaría lo que le costase el precio de su acción. Confirmado el paradero exacto del líder guerrillero, no había lugar para abortar o poner en riesgo la misión. Era una decisión irreversible y la falta de aviso previo a Ecuador, una clara señal de desconfianza.

Es tan significativo el golpe que, a pesar de los resultados que venía obteniendo el actual gobierno contra miembros de la cúpula de las FARC (Simón Trinidad, Sonia, Negro Acacio, Rodrigo Granda, Martín Caballero), nada lograba cambiar el imaginario de los colombianos, con respecto a la imposibilidad de derrotar militarmente a la guerrilla. Con la muerte de Raúl Reyes y, en menos de una semana, la muerte de Iván Ríos —el séptimo hombre del secretariado en la línea de mando— a manos de uno de sus propios hombres, esto cambió en Colombia.

Hoy ya hay quienes afirman que el mito de «la invencibilidad» de la guerrilla ha caído, incluso a pesar de que 40 años de guerra son muchos para señalar con tanta confianza la eminente proximidad del fin de las FARC. No obstante, la verdad es que la organización atraviesa un momento crítico y su moral debe estar muy afectada tras este par de bajas. El analista militar Eduardo Pizarro Leónomez personifica este sentimiento cuando sostiene, en su columna semanal del diario colombiano *El Tiempo*, que «no es un exceso de optimismo afirmar que nos estamos acercando al final de conflicto armado» ya que «a la desmovilización colectiva de las Auc se añade el debilitamiento creciente del ELN y de las FARC.» No obstante, dicho fin estará expuesto a prolongarse, si los vecinos de Colombia persisten en desconocer la responsabilidad que les atañe, y que se deben a sí mismos, de cerrarle decididamente los espacios —políticos, territoriales, económicos— a organizaciones como las FARC.

Habiendo quedado clarísima la posición de la comunidad internacional sobre la inviolabilidad de las fronteras, los asuntos que quedaron pendientes (los puntos de Colombia) prometen tener unos efectos colaterales de enormes consecuencias que, tarde o temprano, tendrán que enfrentarse. La información de los ordenadores es algo que, todos aquellos que han sido antagonizados por Chávez, entre ellos el presidente Uribe, la oposición venezolana, los Estados Unidos, etc. no dejarán ir así de fácil.

VENEZUELA. HUGO CHÁVEZ:
DE LA BELIGERANCIA A LA ABRUPTA RECONCILIACIÓN

La decisión del presidente Chávez ha sido interpretada por algunos como un gesto de solidaridad con Correa, y/o con las FARC y, por supuesto, un acto de retaliación contra Uribe, a quien no le perdona que lo haya removido de su rol de mediador en el acuerdo humanitario colombiano. Otra versión que cada día adquiere más adeptos es que la reacción obedece a una fórmula de distracción, para movilizar apoyo interno a su favor. Mi hipótesis es que hay de todas un poco y que el grado de aplicabilidad de una u otra teoría varía a medida que la crisis evoluciona.

En el momento de sucederse el ataque, los márgenes de aceptación del presidente Chávez eran de un pobre 34 por ciento frente al 67 de principios de 2005, según lo registró la firma Datos. Por otra parte, el pasado 2 de Diciembre, el presidente recibió su primera derrota electoral en muchos años, cuando el NO derrotó su Referendo, eliminando su posibilidad de reelección indefinida. Frente a estos hechos, Chávez buscaba: primero, distraer la atención sobre el caos interno y segundo, despertar un sentimiento nacionalista, con el propósito de recoger apoyo a su favor ante la «amenaza» de agentes externos.

En este sentido, los resultados de su incursión en la crisis fueron sin duda decepcionantes. Mientras que Uribe y Correa vieron cómo rápidamente la opinión pública, los diferentes sectores políticos (incluso los de oposición) y la ciudadanía, en general, les brindaba un decidido espaldarazo, lo mismo no ocurrió con Chávez. Por el contrario, la naturaleza divisoria de su liderazgo ha radicalizado tanto la política venezolana y su reacción de movilizar tropas fue tan desatinada que la oposición no sólo no lo apoyó, sino que convencidamente tomó lado con Colombia, reprochando lo que reconocían era un acto de enorme irresponsabilidad, con fines netamente políticos y electorales. En Noviembre habrá elecciones regionales en el país.

Durante los últimos meses, el Presidente Chávez no ahorró adjetivos y epítetos contra el Presidente Uribe, en una insólita exhibición de obstinación por recordarle que de ninguna manera lo perdonaba por haberlo retirado de su rol, como mediador del proceso del

acuerdo humanitario; y el ataque en suelo ecuatoriano no sería la excepción.

Pero, de repente, cuando la crisis se encontraba en su clímax —que claramente su retórica y movimiento de tropas agravó—, todo cambió. Inesperadamente para la mayoría, el presidente Chávez se presentó a la Cumbre de Río, desplegando una enorme voluntad pacifista y de reconciliación. Durante la Cumbre, no habría un solo impropio de su parte hacia el presidente de Colombia. Algo remarcable, ya que incidentes como la reunión general de Naciones Unidas, de 2007, en la que tuvo el brío de llamar a George W. Bush «el diablo», demuestran que el protocolo diplomático, comúnmente respetado por todos los mandatarios del mundo en estas instancias, no es precisamente un móvil de circunspección para Chávez.

Curiosamente, el giro en su retórica y comportamiento coincidió con la revelación de la información encontrada en los ordenadores. Con todo y que previamente el presidente Chávez había venido manifestando un desproporcionado y abierto respaldo a las FARC, llevando a los colombianos a sospechar de la sinceridad de sus intenciones en el proceso de la liberación de los secuestrados, hasta el momento no eran más que sospechas. En términos concretos, no existía nada lo suficientemente contundente y sólido, que constatará lo que sin duda sería una conducta, no sólo irresponsable, sino hasta criminal y malintencionada del presidente Chávez contra el gobierno democráticamente elegido de Colombia.

Por otro lado, para los otros países de la región que concuerdan con la necesidad de mantener buenas relaciones con Chávez, pero que no tienen previsto ni aspiran a ser parte del proyecto Bolivariano sencillamente porque no lo comparten, la existencia de esta alianza genera alarma. La lógica es la siguiente: si a la interferencia abierta de Hugo Chávez en las elecciones de otros países y otros asuntos internos, se suma la posibilidad de una política de injerencia, a través de grupos irregulares de clara vocación desestabilizadora en contra de gobiernos legítimos, el cóctel cobra una peligrosidad simplemente imposible de obviar. El punto se agrava aún más cuando se incorpora al análisis la estrecha coexistencia que las FARC tienen con el negocio del narcotráfico. Por lo tanto, la confirmación de nexos de este tipo pondría seriamente en entredicho su compromiso de lucha contra este negocio

ilegal. Ello, reforzaría aun más la necesidad de tomar distancia de su proyecto político, pronunciando la posibilidad de su aislamiento y, por lo tanto, golpeando fuertemente su posición de poder dentro del concierto latinoamericano de naciones.

En cuanto a los efectos internos, el hecho podría significarle más problemas de los que actualmente resiste. Ante la delicada situación de escasez de alimentos, de creciente inflación y de alarmantes niveles de inseguridad, resulta casi imposible concebir que los venezolanos no le reprochen el desvío de importantes sumas de recursos públicos a destinatarios como las FARC. Ya eran bastantes las críticas, por parte de la oposición y el malestar generalizado entre los venezolanos por cuenta de las excéntricas campañas diplomáticas del presidente Chávez, en las que suministraba petróleo barato, el petróleo de los venezolanos, a los pobres de ciudades como Londres o Nueva York.

En últimas, el pragmatismo de Chávez prevaleció. En ese sentido, ante el reconocimiento de tanto daño, prefirió buscar la reconciliación con su par colombiano.

ECUADOR: POR LA DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL

Superadas las duras negociaciones de la OEA, los fríos estrechones de mano y los abrazos distantes que se concedieron entre Uribe, Chávez, Correa y Ortega, al concluir el debate en la Cumbre de Río, el ánimo retaleatorio del presidente Correa bajó, pero nunca se apagó. ¿Por qué?

Desde que estalló la crisis, el presidente ecuatoriano ha sostenido su reacción inicial de total indignación. La única excepción a su dura postura se presenció cuando el presidente Uribe le informara vía telefónica —la mañana del 1 de Marzo— lo que aconteció, momento en el que no hubo reclamo. Sin embargo, aunque la protesta era razonable y hasta obligatoria, los motivos que explican su persistencia y la severidad de sus términos se esconden en la coyuntura política actual de Ecuador y en la aceptación que su implacable defensa de la soberanía nacional produjo internamente. Al mismo tiempo, y a pesar de que su avanzada diplomática surtió efecto inmediato, llevándose un duro regaño Bogotá; su falta de deferencia con la causa colombiana, el trato secundario que le dio a la presencia del campamento de las FARC en su territorio, y su terquedad por insistir en dignificar la

muerte del ciudadano ecuatoriano, que murió junto a Raúl Reyes, y que era un activo colaborador de las FARC, comienza a causarle problemas.

Al embarcarse en una línea tan condenatoria de la acción colombiana, el presidente Correa se cerraba asimismo espacio político, necesario para poder rectificar posiciones, sin que ello afectara su credibilidad interna. Efectivamente, tamaña demostración de indignación lo obligaban a mantener un altísimo nivel de coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Más, cuando la tensa defensa que llevó a la OEA, a través de su canciller, y personalmente a la Cumbre de Río, le representaron fácilmente la que podría ser la mayor muestra de apoyo recibida por presidente ecuatoriano alguno, desde que la Gran Colombia se deshizo en 1830. Los ecuatorianos estaban orgullosos de su presidente y así lo demuestra el 80 por ciento de aceptación que le dieron las encuestas, sobre su conducción de la crisis. En el mismo sentido, la prensa y los medios de comunicación en general multiplicaron al unísono su voz de protesta.

Su apuesta por consolidarse internamente cobra sentido, si se tiene presente la crisis de gobernabilidad que ha sufrido el país y que se manifiesta vivamente en la altísima rotación presidencial de los últimos 10 años, durante los cuales 8 presidentes han pasado por el sillón presidencial. Algo en promedio equivalente a la llegada de uno nuevo cada 15 meses. Incluso, con mayor razón, cuando el proceso de reforme constitucional —fundamental para su proyecto político y plataforma para consolidarse en el poder— se encuentra en pleno trámite de aprobación.

Pero, desafortunadamente, la información de los ordenadores también lo compromete. Esta revelaba la realización de una reunión secreta entre su ministro del Interior y Raúl Reyes, con el agravante de que, previamente, los presidentes de los dos países (Colombia y Ecuador) habían acordado que cualquier movimiento ecuatoriano, en el sentido de buscar la liberación de los secuestrados, se haría única y exclusivamente si el presidente Uribe lo autorizaba. Al fin y al cabo, es un tema que, aunque interesa a varios países de la región y del mundo, entre ellos Francia, Estados Unidos, Venezuela y Ecuador, es algo fundamentalmente del fuero colombiano. Así las cosas, ¿este tipo de reuniones no son igualmente violatorias de la soberanía Colombiana?

¿Qué fue exactamente lo que se discutió en esa reunión? ¿Por qué la necesidad de hacerla clandestinamente? En fin, son preguntas que, por más que el presidente Correa insista en que la reunión cumplía propósitos humanitarios, quedarán abiertas. A ello se suma el hecho de que aquella información también habla de la entrega de recursos, por parte de las FARC, a su campaña presidencial. Sobre esto, el presidente Correa ha salido con total vehemencia a desmentir los nexos y ha desestimado la posibilidad de que los ordenadores sobrevivieran a un ataque de tales proporciones.

Sin embargo, con el paso de las semanas, el presidente Correa se ha visto obligado a responder progresivamente por el tema de las FARC. En este sentido, no abordar el tema con suficiente firmeza, desde el principio, y tratarlo como secundario y hasta irrelevante, en comparación con el agravio que se cometió contra la patria, lo han puesto no sólo en situaciones incómodas con la prensa internacional, sino que ya motivaron el remezón más fuerte al interior de su gobierno, desde su posesión. Este último, por cuenta de un enfrentamiento entre el presidente y sus altos mandos militares, sobre información con la que contaban sus agencias de inteligencia, que le fue entregada inoportunamente señalando la complicidad de Aizala con las FARC. El presidente ya había hecho de la dignificación de su muerte un punto de honor. Ante el desatino que esto representaba, el presidente decidió recriminar fuertemente a los suyos, en vez de rectificar, denunciando infiltración de la CIA en la institución, a lo que los altos mandos respondieron exigiéndole un «diálogo frontal y transparente». Como resultado, la totalidad de la cúpula militar, y con ella el ministro de Defensa, se despidió.

Por último, mientras escribo estas últimas palabras, el presidente Rafael Correa hace un anuncio que marca una profunda rectificación de su posición con las FARC. Sus palabras, pronunciadas después de más de 45 días de cometido el ataque, son enfáticas en advertirle a las FARC que cualquier incursión de ellas en territorio ecuatoriano se considerará una «acción de guerra» a la que responderán con toda determinación. Un momento importante, sin duda, que permite pensar en la posibilidad de un diálogo, más sensato, en el futuro cercano entre dos países, que se necesitan mutuamente y que en nada beneficia que la derrota de uno se convierta en la victoria del otro.

CONCLUSIÓN

Finalmente, pareciera que comenzamos a divisar la manifestación de posturas más firmes, no sólo frente al intervencionismo de Chávez en los asuntos internos de los otros países, sino también, frente a la obligación que se deben los países de cooperar ante fenómenos transnacionales, como el terrorismo y el narcotráfico. La posición sentada, el 25 de abril, por Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, nos invita a pensar así cuando, en vísperas de una cumbre Chávez-Lula, recalcó que Brasil «discrepa totalmente de la posición del presidente de Venezuela en relación a las FARC como fuerza beligerante» y señalaba que, tanto su gobierno como su presidente, no son neutros entre las FARC y el gobierno de Colombia.

Este es un gesto de enorme firmeza pero, al mismo tiempo, de enorme tacto de Brasil hacia Colombia y Venezuela. Con él, denota una enorme inteligencia diplomática, del que debieran tomar nota todos los países del hemisferio, en tanto se reconoce la importancia de ejercer una política exterior balanceada y ecuaníme, entre el trato que se deben los países vecinos y el debido respeto que, en términos realistas, se merece Estados Unidos. Mientras que Colombia ha descuidado su política exterior dentro de la región, depositando de manera desproporcionada sus esfuerzos en Estados Unidos, y por ende dependiendo del vaivén de su política interna, Venezuela y su bloque de países amigos han abusado de su retórica antiimperialista y divisoria, combustionando la región y radicalizando de paso sus propios procesos políticos internos. Por último, la marginalización de Estados Unidos en la crisis, como bien hace en señalar el reconocido analista de la región Peter Hakim, demuestra que Latinoamérica ha dejado de ser su «patio trasero».